

Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D.E.I.P de Barranquilla, catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado	08-001-3333-006-2022-00018-00
Medio de control	Acción de Tutela
Accionante	Pantaleón Monroy Gómez
Accionada	Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I. Asunto a decidir

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Pantaleón Monroy Gómez, quien actúa a través de apoderado judicial en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones al estimar vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad social, pensión de invalidez, dignidad humana y mínimo vital.

II. Antecedentes

2.1. Hechos narrados por el Accionante

De la narrativa extensa expuesta por el accionante en el libelo de la demanda de tutela, en el acápite de los hechos, se extraerán los relevantes así:

- Mediante Resolución No. 0485 del 17 de febrero del año 2000, a través de sentencia proferida por el Juzgado 2 de Familia del Circuito de Barranquilla, se ordenó el reconocimiento de pensión de invalidez ante el Instituto de Seguros Sociales (hoy colpensiones), al accionante, habiendo cotizado 733 semanas hasta el año 1998.
- Para el reconocimiento de su pensión de invalidez, obtuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral del 60.95%.
- Que mediante Resolución No. SUB 197039 de 15 de septiembre de 2020, le informan que se declaró la extinción de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que hacía uso y goce, toda vez que, según lo estipulado en la resolución mencionada, el dictamen de calificación de invalidez expedido por la Junta de Calificación de Invalidez en segunda instancia mediante Dictamen No. 8735791-14046 de 18 de octubre de 2017, resuelve que la calificación que le fue realizada arrojó un 45.42% de pérdida de capacidad laboral.



- Que mediante derecho de petición ante la entidad accionada se solicitó revocar la resolución No. SUB197039 de 15 de septiembre de 2020, donde se da la extinción del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
- En consecuencia se solicitó continuar con el pago de la misma, toda vez que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana y, en consecuencia, se solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez adquirido mediante fallo de sentencia proferido por Juzgado 2 de Familia del Circuito de Barranquilla.
- Que radicó derecho de petición ante el accionado el día 21 de julio de 2021, donde solicitó el pago total de los aportes al fondo de pensiones. La respuesta por parte del accionado fue negar reconocimiento de pago de pensión por las razones expuestas en la resolución SUB197039 de 15 de septiembre de 2020.
- En la fecha al no ser atendido en forma eficaz y pronta, su solicitud de extinción de pensión de invalidez, el cual fue radicado mediante recurso de queja del 30 de noviembre de 2021, con el número de radicado No. 2021_14447916 no se le resuelva su derecho fundamental a la seguridad social tramite de pensión de vejez y/o invalidez, dignidad humana, mínimo vital a que tiene derecho por ser una persona de la tercera edad y en estado de indefensión, toda vez que su derecho a recibir servicios en salud le fue revocado.

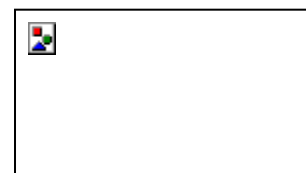
2.2. Pretensiones del Accionante.

1. Solicita la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, seguridad social, trámite de pensión de invalidez, dignidad humana y mínimo vital, los cuales vienen siendo vulnerados por Colpensiones.
2. Se disponga lo pertinente, a fin que la precitada accionada realice los respectivos correctivos para decretar anulada la extinción de pago de pensión de invalidez y se ordene el pago de su derecho pensional con su retroactivo correspondiente.

2.3. Actuación Procesal

La solicitud de tutela fue presentada por correo electrónico ante la Oficina Judicial el día 01 de febrero de 2022. Fue repartida el mismo día a este Despacho. Siendo procedente su admisión, mediante proveído del 02 de febrero de la misma anualidad se admitió, ordenándose a las entidades accionadas que rindieran los informes que establece el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991¹.

¹ Auto notificado a las partes por correo electrónico el 29 de junio de 2021



2.4. Informe de entidad accionada

2.4.1. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Mediante informe allegado a esta unidad judicial, la entidad accionada manifestó:

“Es pertinente indicar que lo solicitado por el accionante en el presente trámite, desnaturaliza este mecanismo de protección de carácter subsidiario y residual frente a los derechos invocados cuando no han sido sometidos a los procedimientos pertinentes e idóneos para su solución; desconociendo así la norma constitucional, ya que este no es el mecanismo para realizar este tipo de reconocimientos.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando una persona es calificada y tiene un 50 % de pérdida de capacidad laboral y reúne requisitos de semanas, le es otorgada la pensión de invalidez, ésta prestación económica no es vitalicia como lo es la de vejez, de tal manera que puede ser revocada por recuperación del estado de salud del beneficiario.

“(…) Que el Instituto De Seguro Social-ISS, mediante Resolución No. 000161 del 30 de enero de 1999, negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor MONROY GOMEZ PANTALEON, identificado con CC No. 8735791 al no acreditar los requisitos de Ley y en su lugar reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión en cuantía única de \$2,282,488.

Que mediante Resolución No. 0485 de 17 de febrero de 2000, el Instituto De Seguro Social-ISS dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla el 11 de febrero del año 2000 Radicado No. 046-2000, ordenando reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor del señor MONROY GOMEZ PANTALEON a partir del 10 de octubre de 1997 en cuantía de \$172.005,00 bajo los parámetros y condiciones de la Ley 100 de 1993, precisando que el afiliado no acreditaba los presupuestos legales para el reconocimiento de la prestación, teniendo en cuenta el dictamen No. 073 de 27 de noviembre de 1997 expedido Junta regional Barranquilla, en el cual se calificó al señor MONROY GOMEZ PANTALEON con una pérdida de capacidad laboral del 60.95% estructurada el 10 de octubre de 1997, a su vez, del retroactivo generado descontó el valor de \$2,282,488, valor correspondiente a la indemnización sustitutiva de la pensión, reconocida en la Resolución No. 000161 del 30 de enero de 1999.

Que validado el expediente administrativo, se encuentra que la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, en proceso de revisión del estado de invalidez del señor MONROY GOMEZ PANTALEON, califica una pérdida del 28.91% de la capacidad laboral estructurada el 16 de agosto de 2016, mediante dictamen No: 20166173608DD de 2 de septiembre de 2016.

Que el señor MONROY GOMEZ PANTALEON, interpone recurso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, quien emite el dictamen No. 22334 de 02 de enero de 2017, otorgando un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 31.01% con fecha de estructuración del 16 de agosto de 2016. Que obra en el radicado 2018_5414717 de 11 de mayo de 2018, Dictamen No. 8735791-14046 de 18 de octubre de 2017, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en sede de segunda instancia, en el cual se califica una pérdida del 45.42% de la capacidad laboral estructurada el 16 de agosto de 2016.

Posterior a la información citada en precedencia, se expidió la resolución SUB-305133 del 17 de noviembre de 2021, mediante la cual se rechaza el recurso de reposición en contra la Resolución SUB-197039 del 15 de septiembre del 2020, por extemporáneo.

Ahora bien, en relación a la solicitud radicada por el accionante No. 2021 - 2021_14447916, me permito informar que dicho trámite está siendo estudiado por el área encargada para entregar una respuesta de fondo, una vez se tenga respuesta del trámite, se notificara de manera inmediata al accionante.

Por lo expuesto, Colpensiones ha actuado conforme a derecho y conforme a las facultades otorgadas por la ley, por lo que no ha vulnerado derecho alguno, es así que no se puede otorgar el pago de la prestación económica que pide el accionante por tutela, pues al reconocer una prestación económica sin el lleno de requisitos, se estaría afectando gravemente el patrimonio de esta Administradora, además, como se manifestó en precedencia, en el proceso de revisión de invalidez del accionante, este presentó mejoría y en la calificación, arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad inferior al 50%”.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este Juzgado es competente para conocer del amparo invocado, por ocurrir en esta ciudad los hechos que lo motivan al ser el domicilio del accionante, lugar en donde este juzgado ejerce Jurisdicción Constitucional.

3.2. Problema jurídico que se plantea

De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde determinar, si la entidad accionada vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del actor, al extinguir el reconocimiento de su pensión de invalidez?

Para abordar el tema se estudiarán: Generalidades de la acción de tutela, Requisitos para su procedencia; Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, especialmente las referidas a la pensión de invalidez y el caso concreto.

3.3. Antecedentes Normativos y Jurisprudenciales

3.3.1 Generalidades de la acción de tutela, requisitos para su procedencia

Conforme lo preceptúa el artículo 86 superior, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de

sus derechos fundamentales cuando quiera resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

Asimismo, es necesario para efectos de proteger un derecho y ordenar a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo que, previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien solicita el amparo y, además, que la entidad demandada, teniendo la obligación de satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo generando una vulneración o amenaza al mismo.

Lo expuesto, es un presupuesto esencial para la procedencia de la acción de tutela, pues a) si no existe un derecho atribuido al accionante, la entidad accionada no podría atentar contra el mismo; o b) constatándose un derecho en cabeza del demandante, si la entidad accionada no ha efectuado ninguna conducta -acción u omisión- que trasgreda el derecho, no habría así un acto de reproche que obligara al juez ordenar una protección.

Así, es necesario para la procedencia de la acción de tutela, verificar la existencia de una acción u omisión actual de las autoridades o de un particular que vulnere o amenace un derecho fundamental, esto es, se debe constatar que la referida trasgresión es cierta, no hipotética, ni eventual o presunta.

Bajo esta premisa, la Corte Constitucional ha definido que la acción u omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico jurídico y que la misma no es procedente bajo una mera suposición; pues no se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, ya que con ello se violaría el debido proceso de los sujetos pasivos de la acción; la garantía de un orden justo y el principio de seguridad jurídica.

Al respecto, ha dicho la Máxima Autoridad de la Jurisdicción Constitucional:

“El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares”. Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no exista una actuación y omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

*En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU -975 de 2003 y T-883 de 2008, al afirmar que “**partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la constitución, como de los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de 1991, se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...)** En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (...)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (...)”*

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermittiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos”

Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.”² (Negritas para resaltar)

3.3.2 Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, especialmente las referidas a la pensión de invalidez

La acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter excepcional, orientado a la protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando aquellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos definidos por la ley

En materia de asuntos pensionales y reconocimiento, a través de su ejercicio, la jurisprudencia constitucional, ha emitido sendas providencias, en donde estudia de manera clara y concreta la temática, pasando, ya sea por los eventos, en los que se discute la necesidad de respuesta de fondo a las solicitudes pensionales, a los casos, en que se delibera sobre el reconocimiento y pago de las mismas.

² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-130 de 2014. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Con base en lo anterior, la H. Corte Constitucional ha venido aceptando que el derecho a la pensión de invalidez es, en sí mismo, un derecho fundamental. Al respecto ha precisado:

“Cuando la pensión de invalidez adquiere relevancia constitucional por su relación directa con la protección de derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, al trabajo o la igualdad, su reconocimiento y pago sí pueden ser reclamados mediante el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable³.

No obstante, se ha indicado, sin importar, en cierta medida, el objeto de la acción, cuando se está inmerso en la determinación de acreencias laborales -prestacionales-, la regla general, es la **improcedibilidad** de la solicitud de tutela, debido a su carácter residual y subsidiario, admitiendo, excepcionalmente, lo contrario, es decir, la procedibilidad de la misma, cuando se logre detentar, la eventual concretización de un perjuicio irremediable o circunstancias de especial protección constitucional (menores de edad, personas de la tercera edad, madres cabeza de hogar, discapacitados, etc.), existiendo así mismo, una carga por parte del actor, en acreditar, sumariamente, la materialización de algunos de los presupuestos aseverados.

Se suma a lo manifestado, que es el juez constitucional, quien de los elementos fáctico y jurídicos, en últimas, determina si es procedente la acción de amparo, atendiendo a las realidades particulares del caso, por lo que se reitera la idea de excepcionalidad, solo en circunstancias específicas, en las que se logre hacer exigible un tratamiento preferencial, bajo los lineamientos de derechos y garantías constitucionales.

En cuanto a la pensión de invalidez, se ha dicho, que esta busca amparar la situación de invalidez, física o mental de una persona, que por esa condición, no puede seguir trabajando, de manera que sus ingresos se ven afectados y con ello, su mínimo vital y el de su familia; de manera que esta prestación, se encuentra ligada a los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y justas, la integridad física y la igualdad⁴.

Sobre ella, el Consejo de Estado ha señalado:

“La pensión de invalidez se reconoce por la pérdida de la capacidad laboral y no se exige para ese efecto, por consiguiente, ni tiempo de servicio determinado ni edad preestablecida ya que su finalidad es proteger al trabajador que ha perdido su capacidad para laborar garantizándole la protección de su derecho a la vida. La pensión de invalidez tiene su origen en los percances que puede sufrir el trabajador en el ejercicio de sus labores o en las circunstancias de otra naturaleza que, cualquiera fuere su edad, le resten su capacidad de trabajo. Este beneficio le

³ T - 156 de 2000

⁴ Sentencia T-962 de 2011.

permite al trabajador sufragar sus necesidades a pesar de la merma de su capacidad laboral”⁵.

Frente al reconocimiento de la pensión de invalidez vía acción de tutela, la jurisprudencia constitucional, por tratarse de una prestación social - acreencia laboral, ha establecido como **regla general, la improcedencia**, no obstante, también ha determinado como excepción, la ineficacia de los medios judiciales para la garantía de los derechos fundamentales en riesgo, habida cuenta del carácter fundamental, que en determinadas circunstancias, adquiere el derecho a la seguridad social en pensiones y su relación íntima con el mínimo vital y el derecho a la vida en condiciones dignas y justas.

Al efecto, la Corte Constitucional ha manifestado:

“En reiterada jurisprudencia esta corporación ha indicado que la pretensión pensional desborda el objeto del amparo constitucional, de manera que las controversias suscitadas por su reconocimiento no son competencia del juez de tutela, debido a que el ordenamiento jurídico ha dispuesto de medios judiciales específicos para la solución de este tipo de conflictos.

Sin embargo, entre otras, la sentencia T-129 de febrero 22 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, resaltó la excepción a la regla general de la improcedencia de la acción de tutela para reconocer derechos pensionales, cuando “los medios judiciales diseñados resulten ineficaces para la garantía de los derechos fundamentales en riesgo. Así pues, cuando el sujeto se encuentre ante la eventualidad de un perjuicio irremediable, de manera excepcional el juez de tutela podrá declarar la procedencia de este derecho”. (Cursiva dentro del texto)”⁶

Criterio que se refuerza, con lo expuesto en la sentencia T - 032 de 2012, así:

“El artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y como una garantía irrenunciable de todas las personas.

Una de las garantías de la seguridad social son las pensiones por vejez o por invalidez. La pensión de invalidez tiene por finalidad proteger a la persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, puesto que, dicha condición física o mental, impacta negativamente su calidad de vida y la eficacia de otros derechos fundamentales. Del mismo modo, busca proteger el mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, cuando éste depende de los ingresos económicos del afiliado.

Con fundamento en estas consideraciones, esta Corporación, en sentencias como la T-658 de 2008, ha señalado el carácter fundamental que tiene el derecho a la seguridad social en pensiones, especialmente respecto de la pensión de invalidez por su relación con la garantía de la dignidad humana; dijo al respecto la Corte:

“El derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana, es un verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social

⁵ Consejo de Estado, Sección II, Subsección B, expediente No. 25000-23-25-000-1998-1988- 01 (3730-00). C. P. Jesús María Lemos Bustamante.

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T- 200 de 2011. M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos.”

Por último, si bien se acepta, de forma excepcional, la acción de tutela para reconocimiento de pensión de invalidez, cuando existe violación del mínimo vital, debe reunirse los siguientes requisitos, conforme lo establece la sentencia T- 938 de 2008 de la Corte Constitucional:

“Ahora bien, cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente por que coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar” (subrayas fuera del texto)

Finalmente, se advierte, que además de la subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, es menester, que la misma se interponga en un término razonable, prudencial y cercano, al acaecimiento de los hechos, de los cuales se predica la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, respetándose, de esta forma, el precepto de inmediatez.

3.4. Caso Concreto

Abordando el sub examine, el accionante solicita, que se protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad humana y mínimo vital; en consecuencia, solicita se ordene al ente accionado, le reconozca y pague la pensión de invalidez y el retroactivo pensional.

Ya se dijo anteriormente, que la aptitud de los instrumentos judiciales ordinarios, para resolver de manera efectiva, los problemas jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos pensionales, debe establecerse a partir de una evaluación exhaustiva, del panorama fáctico y jurídico que sustenta la pretensión de amparo, al partir de considerarse la subsidiariedad de la acción de tutela.

En esa dirección, es dable que en este tipo de asuntos, se considere, el tiempo de espera desde la primera solicitud pensional a la entidad de seguridad social (procedimiento

administrativo), la edad (personas de la tercera edad), la composición del núcleo familiar (cabeza de familia, número de personas a cargo), el estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de enfermedades importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación escolar y potencial conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer) y las circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato socioeconómico, calidad de desempleo), de quien reclama el amparo constitucional, como algunos de los aspectos, que deben valorarse, para establecer si la pretensión, puede ser resuelta eficazmente, a través de los mecanismos ordinarios, o si, por el contrario, las dilaciones y complejidades que caracterizan a un proceso judicial, podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada, se prolongue de manera injustificada.

En razón a ese planteamiento es necesario indicar que, en principio, la tutela no procede cuando se pretende el reconocimiento de derechos pensionales, pues para ese propósito existen mecanismos judiciales ante las jurisdicciones laboral o de lo contencioso administrativo, según la naturaleza del asunto.

Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, unificó las reglas que deben observarse a efectos de examinar el presupuesto de subsidiariedad, respecto de las solicitudes de amparo con las cuales se reclama el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, indicando que se debe verificar:

“(i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico y no existe riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto a consideración, la tutela será procedente de manera definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de medios de defensa idóneos y eficaces, pero existe riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante.”

En tal discurrir, se advierte que las pretensiones de la acción de tutela formulada por el Sr. Pantaleón Monroy Gómez, se fundamentan en la extinción de la pensión de invalidez que había sido reconocida por la hoy accionada desde el año 2000.

Atendiendo a ello, debe indicarse que esta situación se enmarca en las competencias atribuidas a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, consagradas en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por tanto, los medios judiciales de la jurisdicción ordinaria son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados por el precursor.

Aunado a lo anterior, resulta indispensable valorar las condiciones particulares del accionante con el fin de establecer si existe riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, que haga procedente el amparo de manera transitoria.

En este sentido, es preciso señalar que al expediente no se allegó prueba de las patologías que padece el actor, no observándose que exista un riesgo inminente para su vida o su integridad, tampoco se evidencia que el mismo se encuentre afrontando problemas económicos.

De acuerdo con lo dicho, en el sub examine no se presenta una situación de urgencia que amerite la intervención del juez constitucional. De este modo, aunque no se desconoce la condición del demandante, se observa que el material probatorio aportado no logra acreditar una circunstancia de urgencia o gravedad que tornara irrazonable o desproporcionada la exigencia de acudir a los medios judiciales ordinarios de protección.

Así mismo tampoco se vislumbra vulneración del debido proceso, pues los recursos presentados e interpuestos por el accionante han sido desatados oportunamente por la entidad accionada, a la fecha, se encuentra pendiente resolver un recurso de queja presentado en fecha 30 de noviembre de 2021, el cual, es de conocimiento de la entidad, pues así lo manifestó en el informe de tutela rendido, manifestando que el mismo, se encuentra en estudio en el área correspondiente a fin de dar una respuesta de fondo al tutelante.

En ese orden, como en el caso bajo estudio, no se configura un perjuicio irremediable, no es viable que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio, en la medida que no se halla demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, amén que, si bien el actor es un adulto mayor, no es una persona de la tercera edad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Barranquilla, administrando justicia, en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, dignidad humana y debido proceso aducidos como vulnerados por el accionante, de acuerdo a las motivaciones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: Notifíquese el presente proveído por el medio más expedito a las partes, y a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Remítase el expediente con todos sus anexos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ

Jueza

L.P.M

Firmado Por:

**Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a9f9a0af320cce137b15a2dd05c0317f353d62cf1f2644b3d4b237b1adb99629**

Documento generado en 14/02/2022 05:31:39 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**